

140 DPR 779

Partido Popular Democrático Demandantes-Apelantes

v.

Sergio Peña Clós y Otros Demandados-Apelados

Núm. AP-95-10

Sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan Hon. Carmen Rita Vélez Borrás, J.

Apelación

San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 1996

CITese 96 JTS 69

SENTENCIA

Abogados de la parte apelante: Pedro Ortiz Alvarez & Javier Echevarría Vargas. Abogados de la parte apelada: Arturo González Martín & Héctor Aníbal Castro Pérez.

Derecho Constitucional y Electoral: Representación de Minorías.

El señor Sergio Peña Clós ocupó un cargo como Senador por el Partido Popular Democrático (P.P.D.) al activarse la disposición constitucional que garantiza la representación de minorías (Sección 7, Art. II, Constitución del E.L.A.). Posteriormente el Senador Peña Clós cambió su afiliación partidista al Partido Nuevo Progresista (P.N.P.), lo que provocó que el P.P.D. instara acción para que se ordenara al señor Peña Clós a cesar en el cargo y que se certificara un senador adicional a favor del P.P.D., por razón de que el escaño pertenecía al partido. El Tribunal Superior declaró sin lugar la demanda y el P.P.D. apeló al Tribunal Supremo. Este, mediante Sentencia, sin Opinión, modifica la sentencia apelada para ordenar que la Comisión Estatal de Elecciones certifique el candidato adicional correspondiente al P.P.D. para completar la representación de la minoría que contempla la Constitución; se permite al Senador Peña Clós permanecer en el Senado. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón emitió Opinión Concurrente a la cual se unió el Juez Asociado señor Hernández Denton. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión Concurrente y Disidente. EL Juez Asociado señor Corrada del Río emitió Opinión Concurrente y Disidente, a la cual se une el Juez Asociado señor Rebollo

López. El Juez Asociado señor [PAG. 1083] Negrón García emitió Opinión Disidente.

POR NO HABER OPINION DEL TRIBUNAL NO HAY RESUMEN NORMATIVO *

TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA

{DPR 779} El Partido Popular Democrático (en adelante P.P.D.) presentó una apelación contra la sentencia del {DPR 780} Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar una demanda instada por dicha colectividad para que se ordene al Senador Sergio Peña Clós que cese de desempeñar el cargo legislativo que ocupó cuando se activó la disposición constitucional que garantiza la representación de los partidos de la minoría en la Asamblea Legislativa. En su acción, el P.P.D. también solicitó que, a tenor con el inciso (a) de la Sección 7 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se declare que el P.P.D. tiene derecho a que, como su sustituto, se certifique a un senador adicional de esa agrupación, para así reestablecer el número de senadores por dicho partido de minoría a ocho (8).

Como la controversia plantea una cuestión constitucional sustancial, a tenor con el Artículo 3.002, inciso (b), de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, acogimos el recurso.

Con el beneficio de las comparecencias de las partes hemos realizado un examen cuidadoso y abarcador de las cuestiones constitucionales presentes en este caso y estamos en posición de adjudicar esta controversia de importancia pública conforme el resultado de los criterios pluralistas de distintas mayorías del Tribunal.

I

La Sección 7 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que los partidos de minoría tienen derecho a una representación en el Senado de Puerto Rico y establece un mecanismo para el cómputo de los escaños de minoría, que deben añadirse a dichas delegaciones cuando se cumplen los criterios allí establecidos. En virtud de la anterior disposición, en el presente cuatrienio la delegación de minoría en el Senado deberá estar integrada por nueve (9) miembros. Como consecuencia del cambio en la afiliación partidista del Senador Sergio Peña Clós, la Minoría en dicho cuerpo cuenta {DPR 781} actualmente con un senador menos. Esto crea un desbalance ideológico contrario a la fórmula establecida en nuestro ordenamiento constitucional.

II

Con el propósito de remediar el referido desbalance una mayoría de los miembros de este Tribunal, integrada por el Juez Presidente señor Andréu García y los Jueces Asociados señora Naveira de Rodón, señor Hernández Denton y señor Fuster Berlinger, concluyen que la Minoría en la Asamblea Legislativa es acreedora a que se certifique como miembro adicional del Senado a un candidato de la Minoría para completar el número de miembros a que tienen derecho. El Juez Asociado señor Negrón García sustituiría al Senador Peña Clós por un candidato del Partido Popular Democrático.

En cuanto a la posición de Sergio Peña Clós en el Senado, una mayoría de los miembros de esta Curia, por fundamentos distintos, coinciden en que éste puede continuar siendo miembro del

Senado. El Juez Presidente señor Andréu García, y los Jueces Asociados señor Rebollo López, señora Naveira de Rodón y señor Corrada del Río entienden que su cambio de afiliación partidista no se lo impide. Además, el Juez Presidente señor Andréu García y los Jueces Asociados señor Rebollo López, señor Hernández Denton y señor Corrada del Río consideran que este Tribunal carece de autoridad para ordenarle al Senado que lo prive de su posición actual. Los Jueces Asociados señores Negrón García y Fuster Berlingeri entienden que este Tribunal puede declarar que el escaño ocupado por el Senador Peña Clós quedó vacante ipso jure al desafiliarse del P.P.D, y por {DPR 782} ende, no tiene derecho a permanecer en el Senado y debe sustituirse por un candidato seleccionado por el Partido Popular Democrático.

III

Por las razones anteriormente expuestas, se dicta Sentencia modificando el dictamen del Tribunal de [PAG. 1084] Primera Instancia; se permite al Senador Sergio Peña Clós permanecer en el Senado de Puerto Rico, y se ordena que, a tenor con el Artículo 6.012 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. sec. 3272, la Comisión Estatal de Elecciones certifique el candidato correspondiente para completar la representación de la Minoría en dicho Cuerpo Legislativo.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. La Juez Asociada señora Naveira de Rodón emitió Opinión Concurrente, a la cual se une el Juez Asociado señor Hernández Denton. El Juez Asociado señor Fuster Berlingeri emitió Opinión Concurrente y Disidente. El Juez Asociado señor Corrada del Río emitió Opinión Concurrente y Disidente, a la cual se une el Juez Asociado señor Rebollo López. El Juez Asociado señor Negrón García emitió Opinión Disidente.

Francisco R. Agrait Lladó Secretario General

{DPR 782} OPINION CONCURRENTE EMITIDA POR LA JUEZ ASOCIADA SEÑORA NAVEIRA DE RODON A LA CUAL SE UNE EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR HERNANDEZ DENTON - 96 JTS 69

San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 1996

Nos corresponde en esta ocasión delimitar el alcance de la disposición constitucional que garantiza la representación sustancial de los partidos minoritarios en la Asamblea Legislativa, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, {DPR 783} Artículo III, Sección 7, y disponer de su efecto a los hechos particulares del caso ante nuestra consideración. Estos no están en controversia, por haber sido estipulados por las partes durante los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. La sentencia que hoy emite el Tribunal revoca el dictamen del foro de instancia y ordena a la Comisión Estatal de Elecciones que certifique el candidato correspondiente para completar la representación de la minoría en el Senado. Por los fundamentos que a continuación esbozamos, concurrimos con dicho curso decisorio. Veamos.

I

En las elecciones generales celebradas en Puerto Rico el 3 de noviembre de 1992, el Partido Nuevo Progresista (P.N.P) obtuvo veinte (20) escaños senatoriales. Los otros dos partidos políticos que presentaron candidatos al Senado, el Partido Popular Democrático (P.P.D.) y el Partido Independentista Puertorriqueño (P.I.P.), completaron los veintisiete (27) escaños de los que ordinariamente está compuesto el Senado; seis (6) correspondieron al P.P.D. y uno (1) al P.I.P. Así, el P.N.P. obtuvo más de dos terceras partes de los escaños senatoriales. Sin embargo, en relación al cargo de Gobernador, el candidato propuesto por el P.N.P. Hon. Pedro Rosselló González, obtuvo menos de dos terceras partes de todos los votos emitidos para dicho cargo. Como producto de estos resultados se activó la disposición constitucional que garantiza la representación de partidos de minoría a la Asamblea Legislativa, contenida en el inciso (a) de la Sección 7 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. [1] A su tenor, y a base de lo dispuesto en el Artículo 6.012 de la Ley Electoral, {DPR 784} Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 L.P.R.A sec. 3272, la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.) procedió a declarar electos y certificar como Senadores a los licenciados Eudaldo Báez Galib y Sergio Peña Clós, ambos candidatos por el P.P.D. [2] El licenciado Peña Clós oportunamente prestó juramento y tomó posesión de su cargo. Como miembro del P.P.D., formaba parte de la representación de las minorías al Senado de Puerto Rico. Así las cosas, el 12 de octubre de 1993 el Senador Peña Clós notificó al Senador Miguel Hernández Agosto, entonces presidente del P.P.D. y portavoz del caucus de dicho partido en el Senado, y al Senador Roberto Rexach Benítez, Presidente del Senado de Puerto Rico, que había decidido abandonar el caucus del P.P.D. Desde ese momento hasta el 3 de abril de 1995, el Senador Peña Clós se identificó como Senador independiente, desafiado de todo partido político. En esta última fecha, sin embargo, el Senador Peña Clós ingresó oficialmente al P.N.P.

Desde ese momento hasta el presente, la composición del Senado es la siguiente: veintiún (21) escaños ocupados por Senadores afiliados al P.N.P.; siete (7) escaños correspondientes a Senadores del P.P.D.; y [PAG. 1085] un (1) escaño ocupado por un Senador del P.I.P. Al Senador Peña Clós afiliarse al P.N.P. la representación de partidos de minoría al Senado de Puerto Rico se redujo de nueve (9) Senadores a ocho (8).

El 6 de febrero de 1995, el P P.D y los siete (7) Senadores afiliados a dicho partido político[3] presentaron la demanda que da paso al presente recurso. En síntesis, los demandantes {DPR 785} solicitaron: (1) que se le ordenara al Senador Peña Clós que cesara de desempeñar el cargo legislativo; (2) al Presidente del Senado, que cesara de reconocerle a dicho Senador las prerrogativas propias de un Senador; (3) a la Secretaria del Senado, que eliminara el nombre del Senador Peña Clós de los documentos oficiales del Senado; (4) al macero del Senado que impidiera al Senador tomar parte en las actividades que de ordinario desempeñan dichos legisladores; y (5) que se declarara que de conformidad con el mandato de la Sección 7, el P.P.D. tenía derecho a que se certificara un Senador adicional de su colectividad para elevar el número de Senadores por dicho partido de minoría a ocho (8) En este respecto solicitaron también que se le permitiera al P.P.D. certificar al candidato que habría de ocupar dicho escaño.

En instancia, tanto las partes como el tribunal estuvieron de acuerdo en que el caso planteaba exclusivamente una controversia de derecho. Una vez fueron presentados los escritos correspondientes, el caso se dio por sometido. El tribunal de instancia dictó sentencia declarando

sin lugar la demanda, dictamen que fue revocado mediante la sentencia que hoy emite el Tribunal. Concurrimos con dicho dictamen. Veamos.

II

En el presente caso los demandantes reclaman la concesión de un remedio al amparo de la garantía que establece la Sección 7 en cuanto a la representación de los partidos minoritarios en la Asamblea Legislativa. Como paso previo a cualquier análisis de los méritos del caso y a pesar de que no fue planteado por las partes, debemos analizar sus hechos a la luz del principio de justiciabilidad, en cuanto a las doctrinas de legitimación activa, academicidad y cuestión política. Este es un asunto que es inherente al ejercicio de los poderes conferidos al poder judicial dentro de nuestro {DPR 786} sistema republicano de gobierno. La autoridad para analizar los aspectos relacionados a la justiciabilidad de las causas, "nace del elemental principio de que los tribunales existen únicamente para resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen interés real en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas." *E.L.A. v. Aguayo*, 80 D.P.R. 552, 558-59 (1958).

Los tribunales nos imponemos las limitaciones que emanan de estas doctrinas para, entre otras cosas, observar y garantizar el justo balance que se requiere de las distintas ramas de gobierno en la administración de la cosa pública. El análisis de este principio es, por lo tanto, un imperativo necesario dentro de nuestro sistema de separación de poderes. Las limitaciones que surgen del mismo imponen "un mínimo de condiciones para el ejercicio discreto y tolerable de un poder que de otro modo constituiría una clara amenaza para la calidad democrática del sistema y convertiría a los jueces en guardianes de la comunidad." *E.L.A. v. Aguayo*, supra, pág 597. De ahí que la aplicación de las diversas doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad determine la jurisdicción de los tribunales, particularmente en relación a las controversias que se le presentan al amparo de los derechos que garantiza nuestra Constitución. Se trata, pues, de una cuestión de umbral que debemos analizar ante la controversia que nos ocupa.

-A-

La doctrina mediante la cual se ausulta la legitimación activa de un reclamante ha sido sostenida por nuestra jurisprudencia como uno de los ingredientes necesarios para establecer la jurisdicción de los tribunales en consideración a principios de justiciabilidad. Reiteradamente hemos señalado que tiene legitimación activa una parte que cumple con los siguientes requisitos: (1) la parte que reclama debe haber sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño debe ser real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) debe existir una relación causal razonable {DPR 787} entre la acción que se ejercita y el daño alegado; (4) la causa de acción debe surgir al amparo de la Constitución o de alguna ley. Véase, *P.P.D. v. Rosselló González*, Op. de 22 de diciembre de 1995, ___ D.P.R ___, 95 J.T.S. 165, pág. 437, y casos allí citados. En síntesis, los requisitos para establecer la existencia de legitimación activa se refieren a la presencia de un daño real, causalidad y reparabilidad del daño al amparo de la Constitución o de alguna ley. En el análisis se sigue una interpretación liberal de los requisitos de suerte que no le cerremos las puertas a personas y entidades [PAG. 1086] "que presenten reclamaciones que pueden ser debidamente atendidas por el foro judicial." *Col. Opticos de P. R. v. Vani Visual Center*, 124 D.P.R. 559, 564 (1989). La determinación se centra principalmente en la persona que promueve

la acción y secundariamente en las cuestiones a adjudicarse. Con relación a los partidos políticos, al igual que cualquier otra entidad con personalidad jurídica para comparecer a los tribunales,[4] se les reconoce legitimación activa por sí, cuando cumplen con todos los requisitos enumerados. [5]

A los legisladores que comparecen a los tribunales en su carácter oficial, por su parte, se les reconoce legitimación activa cuando mediante la reclamación que presentan buscan vindicar sus prerrogativas legislativas. En estos casos el centro de atención debe recaer sobre las facultades del legislador en sus funciones oficiales, cuestión que se refiere específicamente a "la garantía que tiene todo a legislador a ejercitar plenamente su derecho constitucional a legislar comprendido en el Artículo III, Sección 1 de la Constitución del {DPR 788} Estado Libre Asociado de Puerto Rico." *Hernández Torres v. Hernández Colón*, Op. de 16 de septiembre de 1992, 132 D.P.R. ____ (1992), 92 J.T.S. 123, pág. 9,932. Para sostener su legitimación, el legislador debe cumplir igualmente con los requisitos enumerados anteriormente. [6] En relación a la determinación de legitimación activa de los legisladores, particularmente se trata de evitar que éstos traten de reproducir el debate legislativo en el recinto judicial.

Cuando la pretensión de legitimación activa de un legislador se basa en que se le está impidiendo fiscalizar adecuadamente la gestión legislativa, debe recordarse que la gestión fiscalizadora del legislador envuelve sólo "los mecanismos razonables y necesarios que hagan viables su participación plena en todas las etapas críticas del proceso legislativo." *Hernández Torres II*, supra, pág. 9932 Así, se ve mermada la facultad fiscalizadora del legislador cuando, por ejemplo, se le impide parcial o totalmente participar de forma efectiva en el quehacer legislativo.

Al aplicar los principios normativos esbozados en relación a los demandantes del presente caso, debemos concluir que todos ostentan legitimación activa. El análisis debe quedar enmarcado en las disposiciones legales al amparo de las cuales los demandantes presentan sus reclamos: la Sección 7, que establece un mecanismo para que se le garantice a los partidos de minoría una representación sustancial en la Asamblea Legislativa; y el Artículo 6.012 de la Ley Electoral que establece la fórmula mediante la cual se pone en vigor dicha disposición constitucional.

La referida disposición constitucional dispone, en lo pertinente, que: {DPR 789}

"Cuando en una elección general resultaren electos más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera de las cámaras por un sólo partido o bajo una sola candidatura, según ambos términos se definan por ley, se aumentará el número de sus miembros en los siguientes casos:

a) Si el partido o candidatura que eligió más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera o ambas cámaras hubiese obtenido menos de dos terceras partes del total de los votos emitidos para el cargo de Gobernador, se aumentará el número de miembros del Senado o de la Cámara de Representantes o de ambos cuerpos, según fuere el caso, declarándose electos candidatos del partido o partidos de minoría en número suficiente hasta que la totalidad de los miembros del partido o partidos de minoría alcance el número de nueve en el Senado y de diecisiete en la Cámara de Representantes. Cuando hubiere más de un partido de minoría, la elección adicional de candidatos se hará en la proporción que guarde el número de votos emitidos para el cargo de Gobernador por cada uno de dichos partidos con el voto que para el cargo de Gobernador

depositaron en total esos partidos de minoría. Cuando uno o más partidos de minoría hubiese obtenido una representación en proporción igual o mayor a la proporción de votos alcanzada por su candidato a Gobernador, no participará en la elección adicional de candidatos hasta tanto se hubiese completado la representación que le correspondiese bajo estas disposiciones, a cada uno de los otros partidos de minoría.

b).....

Para seleccionar los candidatos adicionales de un partido de minoría, en cumplimiento de estas disposiciones, se considerarán, en primer término, sus candidatos por acumulación que no hubieren resultado electos, en el orden de los votos que hubieren obtenido y, en segundo término sus candidatos de [PAG. 1087] distrito que, sin haber resultado electos, hubieren obtenido en sus distritos respectivos la más alta proporción en el número de votos depositados en relación con la proporción de los votos depositados a favor de otros candidatos no electos del mismo partido para un cargo igual en otros distritos.

Los Senadores y Representantes adicionales cuya elección se declare bajo esta sección serán considerados para todos los fines como Senadores o Representantes por Acumulación.

La Asamblea Legislativa adoptará las medidas necesarias para reglamentar estas garantías, y dispondrá la forma de adjudicar las fracciones que resultaren en la aplicación de las reglas contenidas en esta sección, así como el número mínimo de votos que deberá depositar un partido de minoría a favor de su candidato a Gobernador para tener derecho a la representación {DPR 790} que en la presente se provee."

En cumplimiento del mandato contenido en el último párrafo de la citada Sección 7, la legislatura aprobó la disposición contenida en el referido Artículo 6.012 de la Ley Electoral. Esta disposición, por su parte, establece en lo pertinente que:

"(1) A los efectos de implementar el inciso (a) de [la sección 7 del Artículo III de la Constitución], se hará la determinación de los Senadores o Representantes adicionales que corresponda a cada uno de dichos partidos en la siguiente forma:

"(a) Dividiéndose [el] número de votos emitidos para el cargo de Gobernador por cada partido de minoría por el número total de votos depositados para el cargo de Gobernador por todos los partidos de minoría; luego

(b) Multiplicándose el resultado de la anterior división por nueve (9) en el caso de los Senadores, y por diecisiete (17) en el caso de los Representantes; y

(c) Restándose el resultado de la multiplicación que antecede, el [sic] número de Senadores o Representantes que hubiere elegido cada partido de minoría, según el escrutinio general antes referido.

El resultado de esta última operación de resta será el número de Senadores o Representantes adicionales que se adjudicará a cada partido de minoría hasta completarse el número que le

corresponda, sin que el total de Senadores o Representantes adjudicados bajo esta fórmula pueda exceder de nueve (9) en el Senado o diecisiete (17) en la Cámara de Representantes."

Del texto de las disposiciones reseñadas surge con claridad que el sujeto a quien el Constituyente quiso tutelar directamente fue al partido político e indirectamente a los miembros que formarían parte de la Asamblea Legislativa como Senadores o Representantes. Claro, el interés objetivo ulterior del Constituyente, garantizar "la expresión de la voluntad del pueblo en el funcionamiento del poder legislativo", [7] rebasa la identidad de los sujetos nombrados en la disposición. {DPR 791} De ahí que se haya expresado que la "fórmula de garantía a las minorías se ha producido y recomendado por la Comisión [de la Rama Legislativa] como un medio de dar justa interpretación a la voluntad del pueblo y no como una concesión a partidos políticos". [8] Los partidos políticos de minoría y sus legisladores son acreedores del derecho cuyo ejercicio promueve la representación sustancial de dichos partidos en la Asamblea Legislativa. A través del ejercicio de este derecho se alcanza el ulterior interés del constituyente; garantizar la expresión de voluntad del electorado. Este es el derecho que se ejerce y el correspondiente interés que se promueve mediante el recurso actualmente ante nuestra consideración. Una vez enmarcada la cuestión de legitimación activa a la luz de las disposiciones legales pertinentes, pasemos a corroborar el cumplimiento de los requisitos reseñados.

Los demandantes en el presente caso reclaman que la actuación del Senador Peña Clós al desafiliarse del P.P.D., partido de minoría, y afiliarse al P.N.P., partido mayoritario, les priva del derecho sobre representación que la Constitución y la Ley les confiere. Esto, continúa su argumento, les produce un daño porque merma las prerrogativas sobre representación que dichas disposiciones legales le reconocen en el desarrollo del quehacer legislativo. Particularmente en relación al P.P.D., le priva del derecho a tener ocho (8) Senadores de su partido en la Asamblea Legislativa, como ante los hechos del presente caso le concede la fórmula contenida en el Art. 6. 012 de la Ley Electoral. [9]

[PAG. 1088] En cuanto a los legisladores, la actuación impugnada logra que la habilidad de éstos para proponer medidas legislativas y fiscalizar las gestiones de la mayoría en la {DPR 792} legislatura se vea disminuida. Por ejemplo y en cuanto a la fiscalización, la desafiliación del Senador Peña Clós del P.P.D., produjo el efecto inmediato de que el Presidente de dicho cuerpo, Hon. Roberto Rexach Benítez, tuviera que alterar la composición de las Comisiones del Senado, de suerte que al P.P.D. se le brindara representación en las mismas, esto en cumplimiento con las normas contenidas en nuestra decisión en *Silva v. Hernández Agosto*, 118 D.P.R. 45 (1986). [10] Al tener que fungir como miembros de más comisiones senatoriales es lógico concluir que la habilidad que tienen estos legisladores para fiscalizar efectivamente la labor legislativa disminuye. [11] Esto es un daño real, claro y palpable[12] causado a los demandantes por la actuación impugnada. Es claro que una merma en la capacidad de participar efectivamente en la labor que efectúan las comisiones, cuando se tiene derecho a ello, produce un daño {DPR 793} cuyas características satisfacen los requisitos promulgados para la corroboración de la doctrina de legitimación activa.

En relación a los restantes requisitos de la doctrina de legitimación activa, los demandantes solicitan que el Senador Peña Clós deje de desempeñar su cargo y que se les reconozca el derecho de nombrar un Senador afiliado al P.P.D. Los demandantes basan su reclamo en las

disposiciones constitucionales de la referida Sección 7. De proceder el reclamo solicitado, o algún otro remedio que tuviera el mismo efecto, claramente se eliminaría la fuente del daño por el que reclaman los demandantes. Se corrobora así el cumplimiento de los demás requisitos enumerados en cuanto a la doctrina de legitimación activa; se cumplen los requisitos de causalidad y de reparabilidad expuestos. Por lo tanto, debemos concluir que los demandantes en el presente caso tienen legitimación activa.

-B-

La doctrina de academicidad, por su parte, tiene el mismo efecto que la aplicación de las demás doctrinas relacionadas al principio de justiciabilidad. Es decir, de ser aplicables sus postulados a determinada situación de hechos, el Tribunal podrá autolimitar su función revisora en relación al asunto que se le presenta. Se dice que "un caso académico... es uno en que se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes que éste haya sido reclamado, o una sentencia sobre un asunto... que[,] al dictarse, por alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente". E.L.A. v. Aguayo, supra, pág. 584. No será académico, y por lo tanto será justiciable, un caso que presente una controversia real, entre partes opuestas, cuando la sentencia que se dicta tiene un efecto práctico. [13] La {DPR 794} virtualidad que requiere la doctrina de academicidad debe permear todo el proceso judicial del caso, incluso ante los foros apelativos durante los procedimientos en alzada.

En el presente caso los demandantes, un partido político y los Senadores afiliados al mismo, reclaman la existencia de un derecho a poder disfrutar de un asiento adicional en el Senado de Puerto Rico durante el presente cuatrienio. Los demandados, por el contrario, niegan la existencia de este derecho. Queda así establecida la corroboración de dos de los requisitos que plantea la doctrina que discutimos; existencia de una controversia real, entre partes opuestas.

Durante cada cuatrienio, la Asamblea Legislativa permanece vigente hasta que los legisladores electos para el próximo cuatrienio prestan juramento y toman oficialmente sus respectivos cargos. Así, dispone nuestra Constitución en su Artículo III, Sección 10, que "[l]a Asamblea Legislativa será un cuerpo con carácter continuo durante el término de su mandato y se reunirá en sesión ordinaria cada año a partir del segundo lunes de enero." La Sección 8 del mismo articulado de la Constitución dispone, por su parte, que "[el] término del cargo de los Senadores y Representantes comenzará el día dos de enero inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la elección general en la cual hayan sido electos." De ahí que la duración de la Asamblea Legislativa se extienda hasta que los miembros de la nueva Asamblea Legislativa ocupen sus cargos el mes de enero siguiente a la última elección general. [14] {DPR 795}

No habiendo finalizado el presente cuatrienio resulta obvio que se cumplen los requisitos de la doctrina de academicidad. Existe una controversia real entre partes opuestas y se satisface el criterio de practicabilidad

-C-

Por último, en esta etapa nos resta evaluar si nuestra intervención con los hechos del caso de autos está [PAG. 1089] impedida en atención a los principios que promulga la doctrina de cuestión política. De todas las doctrinas relacionadas al principio de justiciabilidad, ésta es la que más claramente va unida al propósito citado de guardar el balance en el ejercicio de los poderes constitucionales entre las distintas ramas de gobierno. Aunque la doctrina de cuestión política no ha tenido un fuerte arraigo en nuestra jurisdicción, recientemente tuvimos la oportunidad de sostener la vigencia de sus postulados en nuestro orden constitucional. En *Noriega Rodríguez v. Jarabo*, Op. de 24 de junio de 1994, 138 D.P.R. ___, (1994), 94 J.T.S. 96, pág. 12124, expresamos que la doctrina de cuestión política "sigue siendo una de las reglas de autolimitación en el ámbito local." Toda determinación de la aplicación de esta doctrina debe hacerse, sin embargo, reconociendo que el Poder Judicial es el intérprete final de la Constitución. En *Noriega Rodríguez v. Jarabo*, supra, pág. 12,122, dijimos en cuanto a su alcance que:

"[e]specíficamente, la doctrina de cuestión política impide la revisión judicial de asuntos cuya resolución corresponde a las otras ramas políticas del gobierno o al electorado. Un tribunal se enfrenta a una cuestión política, no susceptible de adjudicación judicial, cuando existe uno de los siguientes elementos: (1) una delegación expresa del asunto en controversia a otra rama del gobierno; (2) ausencia de criterios o normas judiciales apropiadas para resolver la controversia; (3) imposibilidad de decidir sin hacer una determinación inicial de la política pública {DPR 796} que no le corresponde a los tribunales; (4) imposibilidad de tomar una decisión sin expresar una falta de respeto hacia otra rama de gobierno; (5) una necesidad poco usual de adherirse sin cuestionar a una decisión política tomada previamente; y (6) potencial de confusión proveniente de pronunciamientos múltiples de varios departamentos de gobierno sobre un asunto."

Reiteramos, en este sentido, los criterios originalmente esbozados por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en *Baker v. Carr*, 369 U.S. 186 (1962), los cuales son igualmente aplicables en nuestra jurisdicción a la luz de nuestra Constitución.

Las determinaciones a la luz de la doctrina de la cuestión política ameritan un análisis circunstancial pragmático, revestido de la mayor cautela y deferencia a la interpretación que sobre este asunto pueda haber efectuado alguna otra rama de gobierno. No supone de forma alguna, sin embargo, que claudiquemos nuestra función principal dentro de la organización de gobierno bajo la cual vivimos, como intérpretes últimos de los contornos de nuestra Constitución. Después de todo, "[el] mero hecho que el pleito bus[que] la protección de un derecho político no quiere decir que el mismo present[e] una cuestión política " *Baker v. Carr*, supra, pág. 209; citado con aprobación en *Silva v. Hernández*, supra, pág. 54; véase también, *Santa Aponte v. Srio. del Senado*, 105 D.P.R. 750 (1977). A la luz de los principios esbozados, veamos las circunstancias particulares del presente caso.

En instancia los demandantes solicitaron, en síntesis, que se le prohibiera al Senador Peña Clós seguir disfrutando de las facultades y ejecutando las responsabilidades propias de su cargo. Solicitaron también que a los demás demandados se le ordenara dejar de reconocerle al Senador sus prerrogativas legislativas. El tribunal sentenciador interpretó que los demandantes pretendían la expulsión de un Senador por Acumulación debidamente juramentado {DPR 797} como tal, mediante fiat judicial. Ante esta situación, desestimó la demanda. Fundamentó su decisión en el reconocimiento de que una vez debidamente juramentados nuestro ordenamiento no permite

distinciones jerárquicas entre la calidad de los Senadores y, por lo tanto, no cabe negarle a uno lo que legalmente se le concede a los demás. Razonó que una vez juramentado, el licenciado Peña Clós advino Senador por Acumulación para todo propósito, tal cual lo ordena la Constitución,[15] aun cuando su certificación como tal Senador respondiese a las disposiciones constitucionales sobre representación minoritaria. Paso seguido, se refirió a la disposición contenida en el Art. III, Sec. 9 de la Constitución, que prescribe que "[c]ada cámara... con la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros de que se compone, podrá decretar la expulsión de cualquiera de ellos por las mismas causas que se señalan para autorizar juicios de residencia en la sección 21" del Artículo III. Consecuentemente, el tribunal dispuso que "corresponde al Senado de Puerto Rico y no al foro judicial el decidir si debe expulsar o no de su seno al demandado Segio (sic) Peña Clós." Sentencia apelada, pág. 11.

Ahora bien, el análisis de la controversia debe ir más lejos. La Constitución, a la luz de los hechos del presente caso, así nos lo exige. En instancia los demandantes, además de los requerimientos descritos, [PAG. 1090] solicitaron que el tribunal declarara que "conforme la Sección 7 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Partido Popular Democrático tiene derecho a un Senador por adición para llevar el número de sus Senadores durante este cuatrenio (sic) a la cantidad de ocho (8) senadores..." Demanda, pág. 4. El tribunal decidió no analizar este planteamiento porque entendió que el mismo dependía {DPR 798} de la determinación referente a la procedencia de la expulsión del Senador Peña Clós, pretensión que descartó.

Para fines de lo que discutimos, sin embargo, este planteamiento provee el matiz distintivo que produce la inaplicabilidad de la doctrina de cuestión política. Ante este último planteamiento de los demandantes, debemos en primer orden determinar cuál es el alcance de la disposición constitucional en que se basa su petición. Al hacerlo estamos ejerciendo una facultad que se nos encomendó de forma exclusiva, la interpretación final de las disposiciones de nuestra Constitución. De esta interpretación surgirá si en efecto los demandantes tienen derecho a la certificación de un Senador adicional por parte de su partido político, de suerte que el número de Senadores afiliados al P.P.D. aumente a ocho (8). De existir el derecho reclamado procede entonces que determinemos el remedio que debemos conceder. En la medida en que este remedio no conflija con las facultades que deben ejercer las otras ramas de gobierno, no estaríamos ante una cuestión política. Estaríamos disponiendo de reclamos que válidamente se nos presentan a base de derechos que provee la Constitución y que pueden ser compelidos mediante acción judicial. Se trata también de derechos que podrían verse mermados si no interviene el poder judicial. La única limitación que nos impone la doctrina de cuestión política es que el remedio no conflija con las facultades que nuestra Constitución le confiere a otras ramas de gobierno. Enmarcada de esta forma la situación ante nuestra consideración, queda claro que no estamos ante una cuestión política que impida nuestra intervención. Habiendo determinado que el caso ante nuestra atención cumple con el principio de justiciabilidad, analicemos los méritos del mismo. {DPR 799}

III

Nos proponemos determinar el derecho que, a la luz de las particulares circunstancias de este caso, se le debe reconocer a los demandantes bajo la garantía de representación sustancial de

partidos de minoría que ofrece la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Luego procederemos a delinear el remedio al que, a la luz de la anterior determinación, son acreedores los demandantes. El análisis que nos proponemos efectuar supone, principalmente, que delimitemos el alcance de la Sección 7. Para ello, será necesario que primeramente auscultemos su naturaleza y contenido. Veamos.

-A-

Al comenzar el análisis de la referida disposición constitucional, estamos conscientes que "[t]ras casi medio siglo de vigencia de nuestra carta constitucional, situaciones extraordinarias no previstas por el Constituyente han puesto de manifiesto que, en lo que respecta a la consecución de sus propósitos, no existe precedente legislativo o judicial, como tampoco interpretación doctrinal alguna que ofrezca parámetros para determinar el alcance de los efectos prácticos de la fórmula para la representación por adición." [16] No obstante, nuestra función como últimos intérpretes de nuestra Constitución no puede verse impedida por esta falta de precedente. Debemos analizar la referida disposición en todos sus entornos para adjudicar la presente controversia.

No es arriesgado decir que entre los delegados a la Convención Constituyente existía un consenso en cuanto a la necesidad de incorporar en la Constitución una garantía para la representación de los partidos de minoría a las cámaras legislativas. Varias proposiciones se presentaron para alcanzar dicho fin. Así, por ejemplo, la delegación {DPR 800} socialista a la Convención presentó la Proposición número 94, que contenía disposiciones tendientes a promover dicho fin; [17] la delegación republicana, por su parte, presentó las Proposiciones número 103 y 326; y el delegado señor Muñoz Rivera presentó la Proposición número 316. [18]

Todas estas proposiciones tenían en común varios {DPR 801} elementos. De éstos, el más revelador para el asunto que discutimos es el mecanismo mediante el cual se implantaría la garantía de representación minoritaria. Todas, con excepción de la Proposición 326 en lo concerniente a la composición de la Cámara de Representantes, se caracterizaban porque establecían un número fijo del cual estaría compuesta cada [PAG. 1091] cámara y disponían, además, que ningún partido podría postular o escoger más de cierto número de Senadores o Representantes por cada distrito electoral o, en los casos que se proveía para la elección de legisladores por acumulación, entre éstos. El énfasis, por lo tanto, recaía en el número fijo del cual estaría compuesta cada cámara y el número fijo de candidatos propuestos o electos por cada partido de mayoría. Dicho énfasis provocaba necesariamente el aseguramiento de escaños destinados a los representantes de minoría.

Las fórmulas propuestas por estos delegados fueron descartadas. Entre los defectos esgrimidos para ello, dos resaltan: "se le[s] consideraba demasiado mecánica[s] e inflexible[s], ya que simplemente les garantizaba a las minorías, no importa las circunstancias, el control de por lo menos una tercera parte del parlamento; y, en segundo término, no les garantizaba trato justo a los distintos partidos minoritarios, pues permitían que el partido más fuerte de la minoría se adueñase del cupo disponible para ésta[.]" [19] particularmente en relación a la integración del Senado en algunas de estas propuestas, que sólo aseguraba a los partidos de minoría un escaño por distrito.

La disposición propuesta por la Comisión de la Rama Legislativa de la Convención Constituyente, recogió la {DPR 802} preocupación de los delegados a la Convención. [20] Mediante una fórmula diseñada por el Presidente de dicha Comisión, el delegado Luis Negrón López, se trató de garantizar el referido interés de la forma más eficiente posible sin menoscabar la voluntad del pueblo o producir un sistema que propiciara el fraccionamiento de la fuerza electoral provocando así que la administración de la cuestión pública fuese imposible. Con algunas enmiendas, la propuesta de la Comisión fue eventualmente adoptada por la Convención y hoy está en la Sección 7. En el Informe Complementario de la Comisión de la Rama Legislativa, presentado a la Convención Constituyente el 28 de diciembre de 1951, la Comisión se expresó en cuanto a la disposición propuesta. Los miembros de la Comisión razonaron que:

"...es posible que una inadecuada distribución de los votos obtenidos por las minorías produzca el resultado indeseable de que su representación en las cámaras no guarde proporción con los votos que obtengan en las urnas. Previendo esta situación la Comisión ha elaborado un plan de representación que garantiza una justa representación a los grupos minoritarios que no la obtengan en razón a los factores señalados. No se ha elaborado este plan a base del principio de representación proporcional, porque entendemos que no es recomendable ni debe adoptarse. El sistema de representación proporcional equivaldría a reproducir en el instrumento legislativo la misma división de criterios que exista en el cuerpo electoral, y con su adopción el proceso democrático no produciría el resultado de fijar la responsabilidad del gobierno en los grupos favorecidos por la opinión pública. Sin embargo, entendemos que la misión fiscalizadora de las minorías no puede cumplirse eficazmente si no hay la garantía de cierto minimum de representación en proporción {DPR 803} a los votos que las minorías obtengan, consideradas en conjunto. La Comisión entiende que siendo justa y adecuada la división en distritos representativos y senatoriales que se hace en la constitución, y proveyéndose para la elección de un número razonablemente alto de legisladores por acumulación, hay suficiente garantía para que los distintos criterios de opinión pública estén representados en la Asamblea Legislativa. No obstante, para el caso de que esto no resulte así, la Comisión ha recomendado que si un partido o una sola candidatura elige más de dos terceras partes de los miembros de una cámara, se aumente de manera automática la composición de esa cámara para fortalecer la representación minoritaria bajo dos circunstancias distintas: la primera, cuando los partidos de minoría han obtenido más de la tercera parte del voto total emitido para el cargo de Gobernador, en el cual caso el número de miembros de la cámara se aumentará de manera que la representación total de las minorías sea igual a la tercera parte del número original de miembros de dicha cámara. Para el aumento de miembros de una cámara en la forma antes dispuesta, el número original de miembros del Senado será siempre veintisiete (27) y el de la Cámara de Representantes cincuenta y uno (51)."

[21]

De la citada transcripción se pueden identificar al menos dos de los elementos que controlaron el ánimo del constituyente al momento de adoptar la citada disposición constitucional. En primer orden, surge con claridad que fue la intención del constituyente no restarle efectividad a los esfuerzos que tuviera a bien promover el partido seleccionado por el pueblo como partido mayoritario. Segundo, el constituyente tuvo la intención de proveerle a los partidos de minoría la oportunidad de representar efectivamente los [PAG. 1092] intereses de los grupos de opinión que encarnan, de suerte que pudiesen efectuar la importante labor de fiscalizar la gestión del gobierno. Por lo tanto, dispuso para que el mecanismo adoptado aplicase sólo en aquellos casos

en que un sólo partido copase más de dos terceras partes de los escaños de cualquiera o ambas cámaras legislativas. Así limitaba la injerencia de factores externos {DPR 804} a estos casos. Aún en estos casos se aseguró de que el partido así seleccionado por el voto directo del pueblo, no perdiera su estado como partido mayoritario. Para ello dispuso que, al aplicar la fórmula, el número de legisladores por el o los partidos de minoría nunca excedería la tercera parte del número original del cual estaba compuesta cada cámara. En el caso del Senado, por lo tanto, la composición de los miembros de partidos de minoría sería nueve (9), en los casos que aplicase la disposición constitucional. Este número constituye el mínimo que se le quiso garantizar a los partidos de minoría.

En cuanto a su contenido específico la referida Sección de la Constitución provee una fórmula autóctona, calificada como innovadora e, incluso, ingeniosa. [22] En efecto, ninguna de las constituciones estatales o la federal, de los Estados Unidos de América, y ninguna constitución de los países latinoamericanos contenía disposición similar. [23] En esencia, y en lo pertinente, se dispone en la Sección 7 "que cuando en una elección general resultaren electos más de dos terceras partes de los miembros de cualquiera de las Cámaras por un sólo partido, se aumentará el número de los miembros de la Cámara en cuestión declarando electos candidatos del partido o partidos de minoría en número suficiente hasta que el total de los miembros del partido o partidos de minoría alcance el número de nueve en el Senado y de 17 en la Cámara de Representantes." *Fuster v. Busó*, 102 D.P.R. 327, 332 (1974). Establece dos fórmulas generales que han de seguirse, dependiendo de la situación, una vez se corrobore la obtención de dos terceras partes de los escaños de ambas o cualquiera de las cámaras legislativas por un sólo partido político. En el caso que nos ocupa, la fórmula se {DPR 805} relaciona a la situación en que, aun cuando el partido de mayoría obtiene más de dos terceras partes de cualquiera o ambas de las cámaras legislativas, obtiene una relación inferior a las dos terceras partes de todos los votos emitidos para el cargo de gobernador. En estas situaciones la Constitución, en el inciso (a) de la Sección 7 del Artículo III, ordena que: (1) se aumente el número de la cámara correspondiente; y (2) se declaren electos los candidatos del partido de minoría en número suficiente hasta que la totalidad de los miembros de los partidos de minoría alcance el número de nueve en el Senado y diecisiete en la Cámara de Representantes.

En los casos en que existiese más de un partido de minoría, la Constitución dispone unas reglas particulares. Primeramente, se establece que la asignación de escaños adicionales a cada uno de estos partidos guardará relación con la ejecución porcentual que el partido hubiera obtenido en cuanto a todos los votos emitidos para el cargo de Gobernador por los partidos de minoría. Además, la Constitución limita la atribución que concede, en primer orden, a aquellos partidos que hubiesen obtenido una representación en proporción menor a la proporción de votos alcanzada por su candidato a Gobernador.

Para ejecutar la garantía, primeramente se deben seleccionar los candidatos por acumulación para la cámara de que se trate que no hubiesen resultado electos, en el orden de los votos obtenidos. En segundo lugar, se ordena la selección de los candidatos por los distintos distritos.

En relación a la naturaleza de los legisladores que ocupen sus cargos en virtud de esta disposición constitucional, el Constituyente quiso que fuesen considerados para todos los fines como Senadores o Representantes por Acumulación. Con esta disposición quiso asegurar que no

se crease un rango legislativo inferior en cuanto a las responsabilidades y prerrogativas propias del cargo que ocuparía el legislador en virtud de esta disposición {DPR 806} constitucional. Se relaciona, además, a la forma en que habría de sustituirse la vacante surgida en relación a estos cargos, de conformidad con lo dispuesto en la propia Constitución, Art. III, Sec. 8. [24]

Por último, el Constituyente dispuso que la Asamblea Legislativa, mediante ley, debería proveer para: (1) la adopción de medidas para reglamentar las garantías; (2) normas para disponer de las fracciones surgidas en relación a los resultados de las elecciones para fines de disponer los efectos de la garantía; y (3) el número mínimo de votos que un partido político debía obtener para disfrutar de los beneficios de la disposición. De conformidad con la delegación conferida a la Asamblea Legislativa, en la Ley Electoral, supra, se incluyó el Artículo 6.012 que ya hemos citado en su parte pertinente.

[PAG. 1093] De estas disposiciones se desprende la siguiente estructura. Particularmente en relación al Senado de Puerto Rico, la Constitución establece que su composición original será de veintisiete (27) miembros. De surgir la situación descrita en el inciso (a) de la Sección 7, dicha composición original aumentará automáticamente hasta que la representación de todos los partidos de minoría sea de nueve (9) Senadores. Es dentro de estos parámetros que se aplican las operaciones matemáticas previstas por el constituyente y reglamentadas por el legislador.

Finalmente, debemos establecer el alcance que debe reconocérsele a la disposición constitucional bajo análisis. Para ello, debemos analizar los propósitos de la disposición. Como hemos visto, el que se muestra con mayor imponencia es ofrecerle a los partidos de minoría durante el cuatrienio la capacidad necesaria para ejercer su misión fiscalizadora en relación a la gestión legislativa, cuya {DPR 807} duración se extiende durante la totalidad del cuatrienio. [25] Al disponer de esta forma, el Constituyente proveyó una garantía para que la voz de los distintos núcleos de opinión tuviera una efectiva repercusión en la Asamblea Legislativa, a través de los partidos políticos.

Este interés ha caracterizado nuestra historia política contemporánea. El tema de la representación de grupos políticos minoritarios a la Asamblea Legislativa ha estado presente en nuestro marco político desde principios de siglo. [26] Siempre se ha reconocido que "[l]a premisa básica de nuestro ordenamiento es que la mayoría gobierna mediante sus representantes debidamente electos en la Rama Legislativa." *Silva v. Hernández Agosto*, supra, pág. 69. No obstante esta premisa insoslayable, durante el presente siglo se ha reconocido que la garantía de una representación efectiva de las minorías en la Asamblea Legislativa conforma un elemento necesario adicional de ese principio básico de gobierno democrático. Véase *Silva v. Hernández Agosto*, supra, y las autoridades allí citadas.

De ahí que se le haya reconocido al principio de representación minoritaria un alcance que trasciende el evento electoral en sí. Sobre el particular hemos expresado en el pasado que "[a]unque el desarrollo jurisprudencial sobre este tema se limita al momento de escoger los candidatos y a evitar que el derecho al sufragio no sea diluido de tal forma que el voto de los ciudadanos se torne inefectivo, nuestro esquema constitucional en su protección a las minorías {DPR 808} se extiende más allá del proceso electoral. Abarca también la composición de La Asamblea Legislativa para facilitar que represente a todos los sectores de la sociedad." *Silva v.*

Hernández Agosto, supra, pág. 70; citas omitidas. Consecuentemente, el balance ideológico que se establece al principio de cada cuatrienio por virtud de la garantía de representación contenida en la Constitución, debe prevalecer, dentro de lo posible,[27] durante todo el cuatrienio. Esto no significa que el partido político de minoría por el cual se añadió un legislador a la Asamblea Legislativa en virtud de la garantía constitucional sobre representación pueda reclamar un derecho propietario sobre el escaño que ocupa ese legislador. Esto no es óbice para que, sin embargo, pueda reclamar el derecho a que se observe el orden dispuesto por la Constitución en cuanto a la composición de la Asamblea Legislativa dentro de la base de representación adoptada por el Constituyente. A este último reclamo es al que nos referimos a continuación.

-B-

Restaría adjudicar la controversia presentada a la luz de los principios de derecho descritos. En su apelación los demandantes-apelantes presentan como único planteamiento que: "[e]rró el Tribunal de Instancia al no restablecer el balance constitucional según provee el [sic] Sección 7 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico." Entendemos que el error fue cometido.

Como hemos visto, en las elecciones generales celebradas en Puerto Rico el 3 de noviembre de 1992, el P.N.P. obtuvo más de dos terceras partes de los escaños senatoriales; veinte (20) de los ventisiete (27) escaños que originalmente componen el Senado. El P.P.D. y el P.I.P. {DPR 809} obtuvieron los restantes siete (7) escaños; seis, (6) el P.P.D. y uno (1) el P.I.P. Para el cargo a Gobernador, sin embargo, el P.N.P. obtuvo menos de dos terceras partes de los votos emitidos por todos los partidos políticos. Por ello se activó el mandato contenido en la Sección 7.

Consecuentemente, la C.E.E. procedió a analizar los resultados de los comicios para fines de establecer el número y la afiliación política de los candidatos al cargo de Senador que debería certificar electos por [PAG. 1094] adición. El análisis siguió necesariamente lo dispuesto por el legislador y consignado en el Artículo 6.012 de la Ley Electoral. De conformidad con dicho análisis y para satisfacer el citado mandato constitucional de que los partidos de minoría tuviesen nueve (9) Senadores, dispuso que el P.P.D. tenía derecho a que dos más de sus candidatos fuesen certificados como electos. [28] En atención al orden de votos obtenidos, la C.E.E. procedió a certificar la elección de los licenciados Sergio Peña Clós y Eudaldo Báez Galib.

El orden establecido así al principio del cuatrienio se mantuvo hasta el 3 de abril de 1995, cuando el Senador Peña Clós ingresó oficialmente al P.N.P., partido mayoritario. Desde ese momento los partidos de minoría cuentan en el Senado tan sólo con ocho (8) representantes; {DPR 810} existe en dicho cuerpo un desbalance ideológico, conforme a la fórmula establecida por el Constituyente, que le confiere a los partidos de minoría el derecho de reclamar y ocupar nueve (9) escaños en dicha cámara legislativa. Los principios de representación deben prevalecer durante la totalidad del cuatrienio. Debe restablecerse el referido balance concediéndole a los partidos de minoría el número de representantes que dispuso la Constitución para los casos como el presente, nueve (9).

Restaría tan sólo determinar el remedio que entendemos debe concederse para alcanzar el fin propuesto. A estos fines, los demandantes en instancia sostuvieron que procedía que al Senador

Peña Clós se le impidiera fungir como Senador y que los demás oficiales del Senado dejaran de reconocerle las prerrogativas atribuidas ordinariamente a personas que ostentan dicho cargo. El tribunal sentenciador descartó dicha pretensión amparándose en su razonamiento de que lo solicitado significaría la expulsión mediante fiat judicial de un Senador debidamente juramentado. Reconocemos los méritos de dicho razonamiento. No obstante, el mismo no impide la adjudicación final de la presente controversia con la correspondiente concesión del remedio que proceda. [29]

Primeramente, ya este Tribunal ha expresado que, en materia de interpretación y aplicación de las disposiciones de la Constitución, "[e]xcepto que el lenguaje lo haga inevitable, no debe presumirse que una cláusula de la Constitución no tiene sentido alguno o que destruye el propósito de otra cláusula del mismo documento." *Fuster v. Busó*, supra, pág. 339. Por lo tanto, el que la Sección 9 del Artículo III de la Constitución le confiera al Senado la facultad exclusiva de expulsar a uno de sus miembros, no puede tener el efecto de diluir el propósito que persigue la Sección 7 del {DPR 811} mismo articulado constitucional. Debemos concederle virtualidad a ambas disposiciones, por lo que si bien debemos reconocer que no está disponible el remedio de expulsión que solicitan los demandantes, tenemos que asegurar la preservación de las garantías que concede la Constitución sobre la representación minoritaria a la Asamblea Legislativa.

La propia fórmula dispuesta por la Constituyente en la adopción de la Sección 7 nos provee el esquema que consideramos debe seguirse en este caso. Esta ordena que se aumente el número de los miembros del Senado, cuando el partido de mayoría obtiene mediante elección más de dos terceras partes de los veintisiete (27) escaños de los que originalmente está compuesto dicho cuerpo. La cantidad por la cual se aumentará la composición del Senado será aquella que sea necesaria para concederle a los partidos de minoría los nueve (9) escaños que la Constitución le garantiza. En cuanto a la afiliación de los candidatos que deben ser considerados por la C.E.E. para efectuar la correspondiente asignación al cargo de Senador, éste organismo debe adherirse a la misma fórmula dispuesta en el Artículo 6.012 de la Ley Electoral.

Ya hemos visto que de conformidad con dicha fórmula, procede la certificación de la elección de un Senador adicional, afiliado al P.P.D. Le corresponde a la C.E.E. [30] efectuar el análisis correspondiente, en atención a los votos obtenidos en las pasadas elecciones de 3 de noviembre de 1992, primeramente en relación a los candidatos a Senadores por Acumulación por el P.P.D. que no resultaron electos y, sólo cuando no exista otra alternativa, deberá proceder a considerar los candidatos a Senador por Distrito de dicho {DPR 812} partido. Para ello deberá observar, además de lo expresamente consignado en el presente párrafo, toda otra disposición aplicable del referido Artículo 6.012 de la Ley Electoral.

En atención a los fundamentos descritos, procederíamos a dictar sentencia revocando la sentencia apelada y ordenando a la C.E.E. que, dentro de un término razonable que no debería exceder de diez (10) días [31] y en atención a los parámetros dispuestos en el Art. 6.012 de la Ley Electoral, proceda a certificar electo al próximo candidato hábil de acuerdo con la Ley para que ocupe un escaño que se adicionará a los [PAG. 1095] veintinueve (29) ya existentes en el Senado de Puerto Rico.

MIRIAM NAVEIRA DE RODON Juez Asociada

ESCOLIOS OPINION CONCURRENTENTE DE LA JUEZ ASOCIADA SEÑORA NAVEIRA DE RODON - 96 JTS 69

1. Para fines de claridad, en lo sucesivo nos referiremos a esta disposición como Sección 7.
2. El P.I.P. no se benefició de las disposiciones legales sobre representación de las minorías. A base de la fórmula establecida por el legislador para ejecutar el mandato de la referida Sección 7, contenida en el Artículo 6.012 de la Ley Electoral, supra, el P.I.P. tenía sólo derecho a un candidato. Quedó satisfecho dicho mandato con la elección directa del licenciado Rubén Berríos Martínez, como Senador por Acumulación.
3. Los Senadores demandantes en el presente caso son los siguientes: Miguel Hernández Agosto, Antonio Fas Alzamora, Velda González, Marcos Rigau, Cirilo Tirado, Mercedes Otero y Eudaldo Báez Galib.
4. "Para que haya 'acción legitimada' tiene siempre que existir la 'capacidad para demandar'..." R. Serrano Geys, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, pág. 132. Véase, además, Col. Opticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559, 563 (1989).
5. Cuando la organización comparece a los tribunales reclamando los derechos de sus miembros o integrantes, los criterios que se aplican para determinar su legitimación son distintos. Por no ser pertinentes a los hechos del presente caso, no los discutiremos aquí. Para un análisis de estos requisitos, véase Asoc. Maestros P.R. v. Srio. Educación, Op. de 30 de noviembre de 1994, 139 D.P.R. ___ (1994), 94 J.T.S. 145.
6. Para un análisis más a fondo sobre la legitimación activa de los legisladores y una enumeración de las instancias en que le hemos reconocido legitimación activa, véanse Hernández Torres v. Hernández Colón, supra, y Hernández Torres v. Hernández Colón, Op. de 31 de enero de 1992, 130 D.P.R. ___ (1992), 92 J.T.S. 16. Para distinguir estas dos opiniones en lo sucesivo nos referiremos a esta última decisión como Hernández Torres I, mientras que en relación a la primera nos referiremos como Hernández Torres II.
7. Informe Complementario de la Comisión de la Rama Legislativa de la Convención Constituyente, 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 2590 (1961).
8. Id., pág. 2596.
9. El número citado surge de la aplicación de la referida fórmula. Efectuamos el correspondiente cálculo más adelante en la presente opinión concurrente. Véase nota al calce Núm. 30, infra.
10. Para el 12 de enero de 1993 el Senador Peña Clós había sido nombrado miembro de las siguientes Comisiones del Senado: Comisión de Gobierno, Comisión de Nombramientos, Comisión de Salud y Comisión de Corporaciones Públicas. El 28 de octubre de 1993 el Senador Peña Clós fue designado miembro de la Comisión de Asuntos Federales y Económicos y de la Comisión de Hacienda. El 1 de febrero de 1995, el Presidente del Senado designó a los

Senadores del P.P.D., Fas Alzamora y Eudaldo Báez Galib a las Comisiones de Nombramientos y de Corporaciones Públicas, respectivamente. Ambos sustituyeron en ellas al Senador Peña Clós.

El 13 de febrero de 1995 el Senador Peña Clós fue designado miembro de la Comisión de Ética Gubernamental.

Con posterioridad a dicha fecha, los Senadores Roger Iglesias del P.N.P. y Marco Antonio Rigau del P.P.D. [PAG. 1096] fueron nombrados miembros de la Comisión de Gobierno. Por su parte, el nuevo progresista José E. Meléndez y el popular Cirilo Tirado fueron designados a la Comisión de Salud. Todos ellos fueron nombrados en virtud de la R. del S. 1001 que aumentó el número de miembros que componen dichas Comisiones.

Como se desprende de esta descripción, el Senado de Puerto Rico siguió dos vías para asegurar la presencia de miembros del P.P.D., partido de minoría, en las distintas Comisiones a las que pertenecía el Senador Peña Clós. En las de Nombramientos y Corporaciones Públicas, el Senador Peña Clós fue sustituido por Senadores del P.P.D.; en las de Gobierno y de Salud, por otro lado, se aumentó el número de Senadores que las componían y se nombró a las mismas a Senadores del P.P.D.

11. Hemos reconocido la importancia de las Comisiones en la función legislativa. En *Silva v. Hernández Agosto*, supra, pág. 67, expresamos que éstas "constituyen el principal vehículo de fiscalización y legislación de la Rama Legislativa."

12. El concepto de daño que se utiliza aquí se refiere al requisito necesario para establecer la legitimación activa del promovente de la acción, no estamos haciendo alusión al daño que por concepto de indemnización otorgan los tribunales en casos apropiados.

13. No analizamos aquí, por no ameritarlo las circunstancias del caso, las instancias de excepción que han desarrollado los tribunales en relación a la doctrina de academicidad. Para un análisis de estas situaciones excepcionales, refiérase a *Pueblo v. Ramos Santos*, Op. de 30 de junio de 1995, 140 D.P.R. ____ (1995), 95 J.T.S. 94; *C.E.E. v. Dpto. de Estado*, Op. de 16 de diciembre de 1993, 136 D.P.R. ____ (1993), 93 J.T.S. 163; *Asoc. de Periodistas v. González*, Op. de 17 de enero de 1991, 128 D.P.R. ____ (1991), 91 J.T.S. 4.

14. Los legisladores están, potencial o efectivamente, enfrascados en actividades propias de su cargo hasta que finaliza la Asamblea Legislativa, aún después de haber terminado la última sesión ordinaria del cuatrienio, lo cual mediante ley se ha dispuesto que ocurrirá el 31 de mayo. Ley Núm. 9 de 9 de abril de 1954, Sección 1, según enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 1(a). Así, por ejemplo: (1) dicho término podrá extenderse mediante resolución conjunta que se apruebe en dicha sesión ordinaria (Ley Núm. 9 de 9 de abril de 1954, Sección 5, según enmendada, 2 L.P.R.A. sec. 205); (2) el Gobernador puede convocar en cualquier momento a sesiones extraordinarias, según lo permite nuestra Constitución en el Artículo III, Sección 10, y el Artículo IV, Sección 4; y (3) la Asamblea Legislativa tiene siempre la facultad de llevar a cabo procesos de residencia conforme lo dispone la Sección 21 del Artículo III de la Constitución. Además, hemos resuelto expresamente que "[l]os cuerpos legislativos tienen... la potestad de

ordenar a sus respectivas Comisiones... que continúen sus trabajos hasta el último día de la Asamblea Legislativa, o sea, hasta que los miembros de la nueva Asamblea Legislativa ocupen sus puestos el mes de enero siguiente a la última elección general " Hernández Agosto v. Ortiz Montes, 115 D.P.R. 564, 568 (1984).

15. A éstos efectos la Constitución expresamente dispone que "[l]os Senadores y Representantes adicionales cuya elección se declare bajo... [la] sección [7 del Artículo III de la Constitución] serán considerados para todos los fines como Senadores o Representantes por Acumulación." Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo III, Sección 7, pár. 7mo.

16. Resumil de Sanfilippo & Faría González, La Garantía Constitucional a la Representación de las Minorías en la Asamblea Legislativa: Naturaleza Alcance y Extensión, 65 Rev. Jur. U.P.R. 329, 329-30 (1996).

17. Véase, Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, Propositiones y Resoluciones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 1951-1952 182 (1992).

18. J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982, vol. II, pág. 144. Para el texto de las proposiciones 103 y 326, véase, Propositiones y Resoluciones..., supra, págs. 253-54 y 556-57, [PAG. 1097] respectivamente.

La Proposición 94 pretendía establecer un Poder Legislativo con un Senado y una Cámara de Representantes; el primero, con veinticuatro (24) miembros y, la segunda, con cuarentiocho (48). La sección 3, del artículo VI, de dicha Proposición establecía la garantía a las minorías. Disponía que: "[c]ada distrito electoral elegirá tres (3) senadores y seis (6) representantes; pero ningún partido político podrá elegir más de dos (2) senadores, ni más de cuatro (4) representantes, por cada distrito."

La Proposición 103, por su parte, disponía también que la Asamblea Legislativa estuviera compuesta de dos cámaras: el Senado y la Cámara de Representantes. En cuanto al Senado, esta proposición pretendía un mecanismo similar a la Proposición 94; se distinguía de ésta tan sólo en que disponía para la existencia de siete distritos senatoriales, en lugar de ocho, con tres senadores por cada distrito. Disponía también que ningún partido podría postular más de dos candidatos por cada uno de los distritos senatoriales. En cuanto a la Cámara de Representantes, la garantía representativa se vislumbraba de una forma sustancialmente distinta. Disponía esta Proposición que la Cámara constaría de un número indeterminado de miembros, considerándose electo todo candidato que obtuviera un mínimo de diez mil votos en toda la Isla o en cualquier parte de ella.

La Proposición 326, también adelantada por los republicanos, disponía que la Asamblea Legislativa estaría compuesta por un Senado y una Cámara de Representantes. El Senado contendría treinta (30) miembros; tres (3) por cada uno de los ocho distritos electorales propuestos y seis (6) por acumulación. En ningún caso un partido político podría postular o elegir más de dos (2) candidatos por cada distrito o más de cuatro (4) por acumulación. En la Cámara se adoptaba igual sistema: cuarenticinco (45) miembros, cinco (5) por cada distrito electoral y cinco (5) por acumulación. Ningún partido podría postular o elegir más de cuatro (4) representantes por cada uno de los ocho distritos propuestos o más de tres (3) por acumulación.

La Proposición número 316, presentada por el delegado señor Muñoz Rivera, pretendía asegurar también la representación minoritaria. Disponía para la creación de un Parlamento compuesto por una sola cámara. La Cámara tendría setentitres (73) diputados; ocho (8) por cada uno de los ocho (8) distritos propuestos y nueve (9) por acumulación. Ningún partido podría postular o elegir más de siete (7) candidatos por cada distrito, ni más de seis (6) de los diputados por acumulación.

19. J. Trías Monge, *supra*, pág. 145. (Citas omitidas). Para el argumento correspondiente véase la discusión del delegado Sr. Negrón López en relación a varias de estas propuestas. 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, 1301-02 (1961).

20. Con el fin de concretizar efectivamene esta preocupación, debemos señalar que reiteradamente se ha dicho que el propósito para adoptar una disposición constitucional que asegurara el derecho de representación de las minorías era evitar, dentro de lo posible, la situación surgida en las elecciones del 1948. En esa ocasión el Partido Popular Democrático acaparó el 94.8% de los escaños legislativos, pero sólo obtuvo el 61.2% del total de los votos emitidos para el cargo de Gobernador. Los partidos de minoría, sin embargo, habiendo logrado el 38.8%, de los votos para el cargo de Gobernador, obtuvieron sólo 5.2% del total de los escaños legislativos. J. Trías Monge, *supra*, págs. 143-144.

21. 4 Diario de Sesiones, 2595-96 (1961).

22. J. Trías Monge, *supra*, pág. 143.

23. "No existía en realidad precedente exacto para el sistema propuesto por la Comisión de la Rama Legislativa." J. Trías Monge, *supra*, pág. 145.

[PAG. 1098] 24. Cabe señalar que esta disposición no es de aplicación a casos como el presente donde no ha habido muerte, expulsión o renuncia de un legislador.

25. "[E]ntendemos que la misión fiscalizadora de las minorías no puede cumplirse eficazmente si no hay la garantía de cierto minimum de representación en proporción a los votos que las minorías obtengan, consideradas en conjunto." 4 Diario de Sesiones, 2596 (1961).

26. Ya en 1914 existía una llamada Ley de Minorías, para asegurar la representación de grupos minoritarios en la cámara baja del cuerpo. Posteriormente, se incorporó una fórmula similar en la Ley de 3 de julio de 1951, que dispuso sobre la elección de los delegados a la Convención Constituyente. Finalmente, la protección se incorporó a la propia Constitución en la Sección 7 que venimos discutiendo. Véase la discusión del delegado señor Figueroa Carreras, 2 Diario de Sesiones, 1308 (1961).

27. Dentro de este marco de probabilidades debemos excluir la injerencia, directa o indirecta con la conciencia individual de cada legislador. No podemos avalar posiciones que pretendan limitar los dictámenes de la conciencia de los legisladores, por más radical que estos puedan parecer. Estas situaciones deben ser sometidas al palio individual de cada legislador y al electorado. Reconocemos que esta fue la intención del legislador.

28. El cálculo es el siguiente. En relación al P.P.D., se toman los 862,989 votos emitidos para el cargo de Gobernador por dicho partido y se divide esta cantidad por 942,903, que constituye la cantidad total de votos emitidos para dicho cargo por todos los partidos de minoría. El resultado de esta operación, .92, se multiplica por nueve, el número total de senadores de minoría con que debe contar la composición del Senado. Al resultado de esta operación, 8.28, se le resta el número de senadores efectivamente electos por el P.P.D., 6. Del total final, 2.24, se elimina toda fracción menor de la mitad de uno. De ahí surge que el P.P.D. tenía derecho a que se certificaran por adición a dos (2) senadores que corrieron bajo su insignia.

En relación al P.I.P., el cálculo sigue el mismo desarrollo: 72,219 entre 942,903, que es igual a .08; este número se multiplica por nueve arrojando un total de .72, a lo que se le resta uno (1), siendo este el total de candidatos electos para el Senado afiliados al P.I.P.. El total final es igual a una fracción menor que la mitad de uno, por lo que resulta que el P.N.P. no tiene derecho a que se nombre a candidato otro alguno al Senado, en virtud de la disposición sobre garantía de representación.

Toda la información relativa a los resultados de los comicios de noviembre de 1992, surgen de la publicación emitida por la C.E.E., Resultados Finales Escrutinio o Recuentos Isla, Por Precinto y Por Municipio Elecciones Generales, 3 de noviembre de 1992.

29. Resulta importante tener presente que aunque el nuestro es un sistema adversativo de derecho rogado, un tribunal no tiene que conceder lo que se le pide, su deber es conceder sólo lo que en derecho proceda.

30. No procede, por ser contraria al derecho descrito, la pretensión presentada por los demandantes en instancia en el sentido que se les permitiera escoger entre sus filas la persona que ocuparía el cargo adicional al que tenían derecho. En estos casos la Constitución no provee esa facultad. La determinación la deberá tomar la C.E.E. con exclusiva sujeción a los parámetros establecidos en el Art. 6.012 de la Ley Electoral.

31. En la Ley Electoral se reconoce la necesidad de imprimir celeridad y certeza a los procedimientos eleccionarios, por lo que de ordinario los términos dispuestos en la misma son relativamente cortos y de carácter perentorio. Por ejemplo, véanse los términos dispuestos para procedimientos posteriores a la votación contenidos en los Artículos 6.010 l y 6.014 de la Ley, 16 L.P.R.A. secs. 3270 y 3274. En consideración a este mismo principio adoptamos el citado término de diez (10) días.